



Del apagón a Adamuz, la escandalosa ineficiencia de las empresas públicas



Amador G. Ayora

Director de *elEconomista*
<https://twitter.com/AmadorAyora>
[@AmadorAyora](#)

La próxima semana se cumplirá el primer año desde que España se quedó a oscuras sin que aún sepamos las causas que lo provocaron. Lo único que está claro a estas alturas es que el cero energético se produjo por un problema de tensiones, que se descontroló, porque Redeia no aplicó los mecanismos de salvaguarda recogidos en la legislación. En las últimas semanas, hemos conocido algunos audios de los operarios que trabajan en Red Eléctrica (REE) en los que, con palabras coloquiales, advertían que el sistema estaba fuera de control y podía irse “a tomar ...(viento)” en cualquier momento, como así ocurrió.

Me figuro que las conversaciones no son escuchadas activamente por los jefes, aunque sean grabadas para recurrir a ellas en casos excepcionales como éste. Pero me cuesta creer que nadie con autoridad para tomar decisiones estuviera al corriente de los riesgos. De hecho, desde que han entrado las tecnologías de respaldo como nucleares ó gas han desaparecido los problemas.

elEconomista advirtió ya en su portada del 10 de enero de tensiones incontroladas y del riesgo de apagón. Si, además, la red se asomó al abismo en los días previos, ¿por qué nadie tomó medidas preventivas? Esta es la cuestión esencial, lo demás es secundario. Al parecer, se quería batir un récord con el uso de renovables.

La presidenta de Redeia, **Beatriz Corredor**, insiste desde ese día en descargar las responsabilidades en las eléctricas, que causaron las tensiones. Seguramente llevará algo de razón. Un acontecimiento de esta envergadura no se produce por una sola causa. Es innegable que Redeia no hizo bien su trabajo, que consiste en detectar estos fallos pa-

ra prevenir un desastre. En el momento del apagón, las centrales de gas estaban desconectadas, al igual que la mitad de las nucleares, ni siquiera la hidráulica aportaba energía, pese a que las reservas eran altas.

La Comisión Nacional de la Mercadotecnia (CNMC) emitió un informe en el que pone el dedo en la llaga al abrir a REE un expediente por una infracción muy grave, que luego extendió a la central nuclear de Almaraz (Iberdrola), mientras que el de las eléctricas es calificado de grave, un rango menor.

La CNMC investigará a la empresa pública por un doble motivo: Si se programaron las instalaciones “de acuerdo con la casación

de ofertas y gestionando los servicios de ajuste para garantizar los criterios de fiabilidad y seguridad” y si se dieron “las instrucciones necesarias para la correcta operación del sistema eléctrico”. Es evidente que ni lo uno ni lo otro se hizo bien.

Sorprende que se haya tardado un año en señalar

las responsabilidades y que el ministerio dirigido por la vicepresidenta **Sara Aagesen** se lavara las manos sobre el asunto. Tuvo que ser la presidenta de la CNMC, **Cani Fernández**, cuyo cargo vence en un par de meses, la que apuntó a los responsables. Un año después, aún se desconocen los culpables a quien reclamar los daños ocasionados. Me temo que acabarán socializados y repartidos entre todos los ciudadanos. La investigación se alargará aún entre 9 y 18 meses hasta alcanzar las conclusiones finales.

El apagón representa la punta del iceberg del mal desempeño de las empresas públicas y la molicie de sus responsables. Otro evento que sobrecogió a los españoles, el accidente de Adamuz, apunta también a graves errores de Adif, del ente público gestor de la red ferroviaria española.

El accidente fue causado por la rotura de la vía, pese a los intentos iniciales del ministro de Transportes, **Oscar Puente**, por echar balones fuera. Después hemos conocido que la vía llevaba rota desde el día de antes.

Un informe de la Guardia Civil remitido al juzgado de Montoro (Córdoba) conclu-

ye que los sistemas de supervisión de Adif registraron indicios sobre una posible rotura de carril casi 22 horas antes del accidente de Adamuz sin que se activara ninguna alerta automática, que evitara la tragedia, en la que perdieron la vida 46 personas.

La investigación refleja que el sistema de mantenimiento de Adif (SAM) llegó a registrar de forma pasiva una alteración eléctrica compatible con una rotura horas antes del accidente, pero el sistema de señalización no estaba configurado para alertar de ello de forma automática por la falta de fiabilidad del método en esta infraestructura. Adif, a pesar de contener en sus especificaciones que debe estar diseñado para detectar la fractura, no lo exigió. Las auscultadoras para comprobar el estado de las vías tampoco lo detectaron.

Si comparamos estos dos casos, la conclusión es escalofriante, nadie parece estar al mando en los momentos críticos. La búsqueda de un responsable es una tarea imposible. Al final, los platos rotos los pagaremos entre todos. Pero la vida ya no se puede devolver a quienes la perdieron por la negligencia de las empresas públicas.

El colofón sobre la mala gestión pública, lo completa la SEPI. El holding público puso en marcha un plan de rescate de empresas en dificultades a causa del Covid encaminado a evitar el cierre de sociedades solventes o estratégicas. Pero el reparto de los fondos en vez de realizarse sólo con criterios económicos se hizo por motivos políticos.

El temprano salvamento de Air Europa se urdió gracias a la presión del comisionista **Víctor de Aldama**, que se movía como pez en el agua por los ministerios de Economía, Hacienda y, sobre todo, el de Transportes, entonces dirigido por **José Luis Ábalos** y su ayudante, **Koldo García**, a los que compró con el pago de comisiones.

Algo similar ocurrió con Plus Ultra, bajo el asesoramiento **Julio Martínez Martí-**

nez, testaferro del expresidente **José Luis Rodríguez Zapatero**, a quien abono el 1% del rescate, el típico porcentaje por intermediación. La SEPI no ha sabido explicar aún por qué otorgó 53 millones a una aerolínea, que destinó una parte para saldar deudas contraídas con anterioridad por sus propietarios con acreedores colombianos. ¿Nadie supervisó la utilización del dinero público?

Peor aún es el caso de Duro Felguera, que acaba de librarse del concurso por los pelos. La SEPI le prestó 120 millones, pese a que no cumplía ninguno de los requisitos para recibir el dinero, ni siquiera estaba al corriente de los pagos a la Seguridad Social. Eso sí, la empresa fue declarada estratégica por el Gobierno de Asturias, que no asumió ni un euro del rescate. ¡Qué fácil es disparar con pólvora ajena!

Air Europa ha devuelto ya las ayudas gracias a la fulgurante recuperación del sector aéreo tras el covid. En Plus Ultra, la SEPI acaba de prorrogar la devolución del principal para evitar su quiebra y la pérdida del préstamo. Y en Duro Felguera se enfrenta a fuertes presiones de los acreedores para aceptar una quita ó la conversión de la deuda en capital. Otro muerto con cargo al Estado español.

Esta es la gestión pública que reclaman los sindicatos y que pretenden extender en ámbitos como la sanidad a todos los hospitales. O son miopes o tienen intereses espurios, como las generosas subvenciones que reciben para sufragar su existencia ante la falta de militantes activos.

Para más Inri, el presidente **Sánchez** y la ministra de Vivienda, **Isabel Rodríguez**, pretenden resolver el mayor problema social de nuestro país, la falta de vivienda, con la creación de una empresa pública, Casa 47, que se dedicará a promover la construcción de casas asequibles sin antes resolver el atasco existente en la concesión de licencias o la disponibilidad de suelo urbano. Hay que estar realmente ciegos y vivir de espaldas a la realidad para confiar en las empresas públicas españolas, con una gestión caracterizada por la ineficacia y la falta de transparencia.

PD.- La guerra va para largo. **Trump** prolongó el alto el fuego esta semana, pese a que Irán no se sentó a la mesa de negociaciones. Una prueba de que no tiene más opción que aguantar, ya que acabar con “la civilización” persa, como llegó a prometer, sería una grave violación de los derechos humanos intolerable para un dirigente democrático. Continuar con los bombardeos aéreos tampoco es la salida, ya que no sirvieron para acabar con el régimen iraní, que tiene la oportunidad de fortalecerse con el alto el fuego. En estas circunstancias, no queda más que continuar con el bloqueo del Estrecho de Ormuz para impedir las exportaciones petroleras iraníes, como medio de presión para negociar. El fuego cruzado de acusaciones y de apresamiento de barcos puede prolongarse durante semanas, mientras que el petróleo se consolida sobre los cien dólares. Un desastre.



Escándalos y graves errores de gestión acorralan a la empresa pública. PV